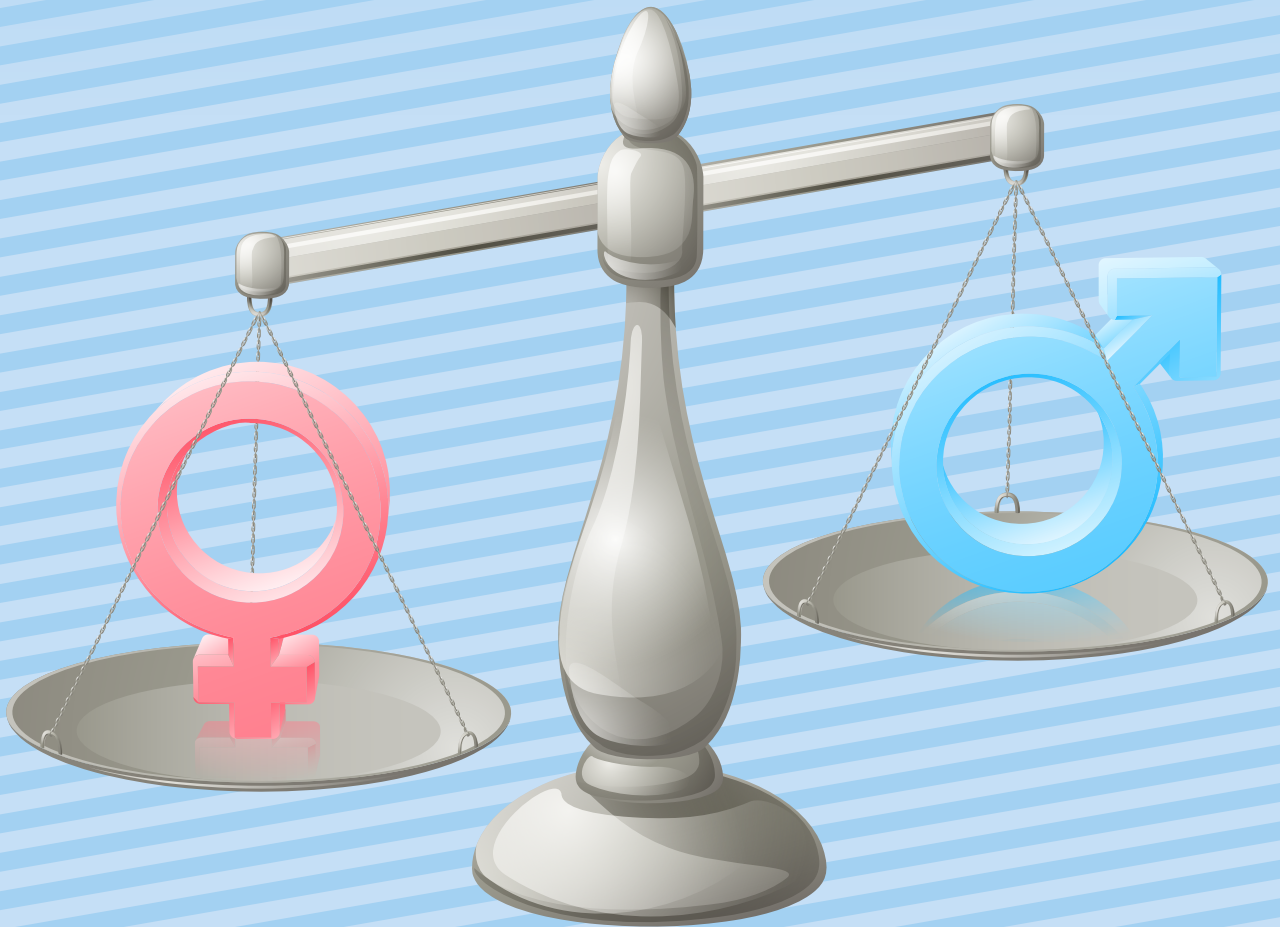


Incorporación de la perspectiva de género en el Fondo de Transparencia



*Preparado para el
Fondo de Transparencia por:*
Kristen Sample

Incorporación de la perspectiva de género en el Fondo de Transparencia

Preparado para el Fondo de Transparencia por:
Kristen Sample

Copyright©2018BancoInteramericanoDeDesarrollo.Estaobra seencuentrasujetaauna licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
www.iadb.org

Agradecimientos

Este documento ha sido posible gracias a las generosas contribuciones de los donantes del Fondo de Transparencia del BID: Gobierno de Canadá, Gobierno de Italia, Gobierno de Noruega, Gobierno de Suecia y MasterCard Corporation. La autora agradece los aportes recibidos de Francesco De Simone, Roberto de Michele, Darinka Vásquez Jordan, Vivian Roga, Robert Pantzer y Denisse Wolfenzon, así como los valiosos comentarios y sugerencias de Nicolás Dassen, María José Jarquín y Juan Cruz Vieyra.

Índice

Resumen ejecutivo	v
Capítulo 1: Introducción	v
1.1 Objetivo de esta guía	1
1.2 Fondo de Transparencia del Banco Interamericano de Desarrollo	1
1.3 La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer de acuerdo con la visión del Banco Interamericano de Desarrollo	3
Capítulo 2: Vínculos entre género y transparencia	5
2.1 ¿Más mujeres, menos corrupción?	5
2.2 ¿Las mujeres y los hombres se ven afectados por la corrupción de manera diferente?	6
2.3 La explotación sexual como forma de corrupción	9
2.4 ¿Reaccionan los hombres y las mujeres de manera diferente ante la corrupción?	11
2.4.1 <i>Recurso legal</i>	11
2.4.2 <i>Protección jurídica</i>	12
Capítulo 3: Preguntas clave para incorporar la perspectiva de género en todos los pilares del Fondo	15
3.1 ¿Se benefician del proyecto las mujeres y los hombres por igual? ¿Cómo es posible saberlo?	15
3.2 ¿Las mujeres proporcionan y tienen acceso a la información?	16
3.3 ¿Las mujeres tienen voz en la toma de decisiones? ¿Existen oportunidades para involucrar a las organizaciones de mujeres?	17
3.4 ¿Presenta el proyecto riesgos de género?	17
3.5 ¿Llega el proyecto a mujeres de distintas identidades sociales, económicas, étnicas y raciales?	18



Capítulo 4: Incorporación de la perspectiva de género por pilar del Fondo de Transparencia	21
4.1 Integridad financiera	21
4.1.1 Lucha contra el lavado de dinero	21
4.2 Sistemas de control	23
4.2.1 Auditorías de igualdad de género	24
4.2.2 Sistemas de denuncia sensibles al género	24
4.3 Gobernanza de los recursos naturales	25
4.3.1 Negociaciones de contratos con perspectiva de género	26
4.3.2 Análisis y cartografía de los impactos de las industrias extractivas	26
4.3.3 Planificación de género para el uso de los ingresos de las industrias extractivas	26
4.4 Gobierno abierto	27
4.4.1 Cumplimiento de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto	27
4.4.2 Gobierno electrónico	28
4.4.3 Presupuestación con perspectiva de género	29
4.4.4 Tecnología de la información y la comunicación: política e innovación	29
4.4.5 Nivelar las condiciones de competencia en materia de contratación pública	30
4.4.6 Diagnóstico de la función pública	31
4.4.7 Mapeo comunitario	31
4.4.8 Monitoreo del desempeño	32
4.4.9 Iniciativas FixMyStreet	32
4.4.10 Mejora del manejo de casos y de la transparencia en el Poder Judicial	33
4.5 Sextorsión: una esfera emergente	34
4.5.1 Recopilación de datos e investigación	34
4.5.2 Revisión y reforma del marco jurídico	34
4.5.3 Códigos de conducta	34
4.5.4 Mecanismos de concienciación y denuncia	35
Capítulo 5: Monitoreo y evaluación	37
Referencias	41

Resumen ejecutivo

Introducción

En los últimos años, América Latina y el Caribe ha experimentado un fuerte repunte en la movilización pública contra la corrupción, así como en la adopción de reformas que mejoran la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esas medidas anticorrupción no han sido diseñadas para asegurar que las mujeres y los hombres se beneficien por igual, pese a la gran cantidad de datos disponibles sobre los efectos de la corrupción en relación con el género. Por ejemplo, estudios llevados a cabo en distintos países y regiones han revelado que las mujeres tienden a sufrir más a causa de la corrupción, dada su mayor tasa de pobreza, responsabilidad en el cuidado de la familia, dependencia de los servicios públicos y situaciones de discriminación y marginación. También hay indicios de desequilibrios de género en la respuesta a la corrupción, ya que las mujeres tienen menos probabilidades de denunciar hechos corruptos, debido tal vez a un acceso más limitado a la información.

Creado en 2007, el Fondo de Transparencia (el Fondo) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha trabajado en estrecha colaboración con los países miembros de América Latina y el Caribe para fomentar su capacidad de hacer frente a la corrupción en el sector público. El Fondo ha apoyado más de 50 proyectos en cuatro ámbitos:

- Integridad financiera
- Sistemas de control
- Gobernanza de los recursos naturales
- Gobierno abierto

La presente guía tiene por objeto brindar apoyo para la incorporación de la perspectiva de género en el Fondo con el fin de asegurar que los proyectos de



transparencia del BID respondan a las necesidades de mujeres y hombres. La guía incluye resultados de investigaciones, preguntas orientadoras, ejemplos de buenas prácticas, puntos de entrada potenciales para la programación e indicadores sugeridos.

Preguntas transversales para incorporar la perspectiva de género

En consonancia con el compromiso del BID acerca de la incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores que apoya, durante el diseño de los proyectos hay que tener en cuenta una serie de preguntas transversales:

- ¿Se benefician del proyecto las mujeres y los hombres por igual? ¿Cómo es posible saberlo?
- ¿Las mujeres proporcionan y tienen acceso a la información?
- ¿Las mujeres tienen voz en la toma de decisiones?
- ¿Presenta el proyecto riesgos de género?
- ¿Llega el proyecto a mujeres de distintas identidades sociales, económicas, étnicas y raciales?

Incorporación de la perspectiva de género a través del pilar de transparencia

Si bien las preguntas transversales anteriores son aplicables a todos los tipos de proyectos de transparencia, también hay desafíos y oportunidades específicos para cada uno de los cuatro pilares. De los más de 20 puntos de entrada indicados en esta guía para incorporar la perspectiva de género, podría considerarse especialmente adecuado dar prioridad a las siguientes actividades con los países miembros, sobre la base de las iniciativas en curso y la urgencia contextual.

Integridad financiera

- Análisis de género de las evaluaciones nacionales del riesgo de blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo, con especial atención al monitoreo de los ingresos derivados de la trata de personas.



- Análisis y reformas para atenuar los requisitos de debida diligencia que puedan reducir el acceso de las mujeres a los servicios financieros.

Sistemas de control

- Diseño e implementación de auditorías que evalúen la capacidad de un gobierno para cumplir con las obligaciones de igualdad de género asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Gobernanza de los recursos naturales

- Desarrollo de una cartografía de género de los beneficios e impactos de los proyectos financiados por los ingresos de la industria extractiva.

Gobierno abierto

- Integración de compromisos específicos en materia de género en los planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y presencia de mujeres en los comités nacionales.
- Digitalización y simplificación de los procesos administrativos, que respondan en particular a las necesidades de las mujeres.
- Concienciación y reformas para fomentar la competencia en los procesos de adquisición a fin de aumentar la participación femenina.
- Puesta en marcha de procedimientos y criterios para garantizar un análisis presupuestario sensible al género durante el desarrollo legislativo.
- Diseño de proyectos participativos de geocartografía que incluyan análisis de género y participación equitativa de mujeres y hombres.

Introducción

1.1 Objetivo de esta guía

Esta guía aspira a ser un instrumento para la incorporación de la perspectiva de género en el Fondo de Transparencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (en adelante, el Fondo). Concebida para asegurar que el Fondo identifique y diseñe proyectos que respondan a las necesidades de las mujeres y los hombres por igual, la guía incluye conclusiones de investigaciones, preguntas orientadoras, ejemplos de buenas prácticas, posibles puntos de entrada para la programación e indicadores sugeridos.

“La integración de la perspectiva de género es el proceso que busca que la igualdad de género y las necesidades de mujeres y hombres sean escuchadas y atendidas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de sus operaciones” (BID, 2017b).

1.2 Fondo de Transparencia del Banco Interamericano de Desarrollo

En 2007 el BID creó el Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción (actualmente denominado “Fondo de Transparencia”) dentro de su División de Innovación para Servir al Ciudadano. Su objetivo es “fortalecer la capacidad institucional de los países miembros prestatarios del Banco para prevenir y controlar la corrupción” (BID, 2016). Establecido con el apoyo del Real Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega (con una contribución total hasta la fecha de US\$12,4 millones), el Fondo también ha recibido desde entonces contribuciones de Canadá (US\$9,1 millones), Italia (US\$1,2 millones), MasterCard (US\$900.000), Suecia (US\$500.000) y el BID (US\$1,2 millones).

Desde su creación, el Fondo ha apoyado 56 proyectos en 20 países. Una evaluación llevada a cabo en 2017 reveló que ha tenido un rendimiento “impresionante”,



pues alcanzó o superó casi todos los objetivos de rendimiento y demostró “notables progresos en el incremento de la eficacia de las instituciones” (Trapnell, 2017).

Como se indica en su marco estratégico, el Fondo prioriza la programación en cuatro pilares:

- Integridad financiera. Este pilar incluye: a) la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y b) una mayor transparencia de los sistemas fiscales y de las medidas de lucha contra los paraísos fiscales y las actividades extraterritoriales.
- Sistemas de control. Trata de fortalecer las entidades de auditoría gubernamental interna y externa para las auditorías financieras tradicionales, así como las auditorías sectoriales y de resultados, sobre la base de análisis de riesgos.
- Gobernanza de los recursos naturales. Este pilar se dirige a fomentar la transparencia y el acceso a la información sobre los beneficios e impactos de las industrias extractivas.
- Gobierno abierto. Promueve el acceso a la información e impulsa la participación ciudadana en el diseño, la implementación y el monitoreo de políticas públicas, servicios, presupuestos y gastos.¹

Dentro de estas cuatro áreas, hay una gran variedad de opciones de programación. Cuatro principios rectores ayudan a centrar aún más el enfoque temático del Fondo:

- El Fondo reconoce que la transparencia en su forma más simple —la divulgación de información estandarizada— es insuficiente para reducir la corrupción. Para ser eficaz como herramienta de política, la información debe ser entendida y utilizada por el público para la toma de decisiones, y los organismos gubernamentales han de percibir las respuestas del público y actuar en función de ellas. Con esto en mente, el Fondo se basa en el concepto de “transparencia focalizada”, que desalienta “la simple colocación de datos en el dominio público” y en cambio enfatiza un enfoque en el contenido, que sea “fácil de usar, personalizado e interactivo” (Fung et al., 2007; Dassen y Vieyra, 2012).
- Como lo implica el objetivo del BID acerca de la “capacidad institucional”, los proyectos se centran ante todo en fortalecer la capacidad de las instituciones gubernamentales.

¹ Puede verse un panorama más completo de cada pilar en Trapnell (2017).

- El Fondo da prioridad a las actividades que puedan reproducirse y ampliar su alcance dentro de un país o entre países.
- El Fondo se centra en iniciativas innovadoras y se apoya en el uso de tecnología de punta con un fuerte énfasis en el desarrollo del conocimiento en sus áreas de operación.

1.3 La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer de acuerdo con la visión del Banco Interamericano de Desarrollo

En 2010 el BID aprobó la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (GN-2531-6) para fortalecer su respuesta a las metas y compromisos de los países miembros de América Latina y el Caribe de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El compromiso del BID con la igualdad de género está en línea con las obligaciones legales internacionales en dicha materia, en particular con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que ha sido ratificada por todos los gobiernos de la región. Además de los argumentos basados en los derechos humanos, estudios de todo el mundo han demostrado también que la igualdad de género es un ingrediente esencial para el progreso sostenible hacia el desarrollo económico y social.

A través de su Plan de Acción de Género 2017-2019, el BID busca promover la igualdad de género en todos los proyectos y en su labor analítica, así como mitigar los impactos negativos de género en mujeres y hombres que podrían ocurrir como resultado de los proyectos del BID. El apoyo del Banco a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer se canaliza a través de los siguientes mecanismos (BID, 2017a):

- Incorporación de la perspectiva de género: Integración de las cuestiones de género en todos los sectores del desarrollo y en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de sus operaciones.
- Inversión directa: Apoyo directo en esferas estratégicas mediante productos de conocimiento y fortalecimiento de las capacidades.
- Salvaguardias de género: Revisión de las operaciones financieras para identificar y abordar los impactos y los riesgos de la exclusión por razones de género.

Vínculos entre género y transparencia

2

Para diseñar proyectos de transparencia que satisfagan las necesidades de mujeres y hombres por igual, es necesario entender la relación entre el género y el contexto general de la corrupción. A continuación, se examinan los estudios de especialistas y organizaciones de profesionales en relación con los posibles mecanismos causales y los costos e impactos de la corrupción para cada sexo.

2.1 ¿Más mujeres, menos corrupción?

Los datos de que se dispone son contradictorios en cuanto a si las mujeres son menos corruptas que los hombres. Las primeras investigaciones del Banco Mundial apuntan a una correlación entre niveles más altos de mujeres en los parlamentos y niveles más bajos de corrupción (Dollar, Fisman y Gatti, 1999). Sin embargo, al tratar de reproducir el estudio del Banco Mundial, otra investigación concluye que “ni el hecho de que haya más mujeres en el gobierno en un momento dado ni el aumento de la representación de la mujer en el gobierno a lo largo del tiempo afecta a la corrupción...” (Sung, 2012). En esa línea, un trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no encontró correlación entre los niveles de representación de las mujeres y la corrupción en América Latina (PNUD, 2014a).

Varios estudios han llegado a la conclusión de que, en la medida en que pueda haber una correlación entre género y corrupción, esta depende del contexto, en particular de la interacción con factores institucionales y de la socialización de género.² He aquí algunos ejemplos:

² La importancia de cómo la cultura influye en la participación de las mujeres también ha sido destacada en una investigación basada en métodos de diseño experimental (Alatas et al., 2009).



- Una investigación basada en un diseño experimental indica que el género no tiene un efecto estadísticamente significativo en la probabilidad de ofrecer un soborno, aunque es menos probable las mujeres acepten un pago si el sobornado es de sexo femenino (Rivas, 2008).
- La presencia de la mujer —como factor de menor corrupción— puede ser más importante en los cargos electos que en las burocracias, donde las interacciones se rigen por normas organizativas más que por la experiencia personal (Stensöta, Wängnerud y Svensson, 2015).
- La correlación entre la presencia de mujeres en la política y menores niveles de corrupción puede ser cierta en las democracias, pero no en los regímenes autoritarios. Combinando los factores de desarrollo institucional y socialización de género, los investigadores plantean la hipótesis de que, como grupo desfavorecido, las mujeres tienen un mayor interés en adherirse a las normas. Dado que las democracias están asociadas a normas anticorrupción, las diferencias de género aparecen en estos contextos y no en los autoritarios (Esarey y Chirillo, 2013).

Una línea de investigación relacionada se ha centrado en los roles de género, planteando que las mujeres pueden ser menos corruptas porque han sido socializadas para evitar el riesgo y ejercer niveles más elevados de autocontrol que los hombres (Swamy et al., 2001). Otra escuela de pensamiento sostiene que la corrupción depende de la exposición más que de la naturaleza intrínseca de las mujeres. En otras palabras, si las mujeres son menos corruptas, eso se debe a que están en gran medida excluidas de las redes corruptas o de las oportunidades de participar en actividades corruptas (Goetz, 2007). Este enfoque en el acceso es coherente con un estudio llevado a cabo en Ghana (Alhassan-Alolo, 2007), el cual indica que, expuestas a una oportunidad que involucre corrupción, las mujeres en la vida pública no resultan ser menos corruptas que los hombres. En el cuadro 1 se resumen las teorías que tratan esta cuestión aún no resuelta de si las mujeres son menos corruptas que los hombres.

2.2 ¿Las mujeres y los hombres se ven afectados por la corrupción de manera diferente?

En cuanto a la cuestión de si los hombres o las mujeres pagan más sobornos, los datos son dispares. Los hombres declaran pagar más sobornos (Rheinbay y Chêne, 2016; Universidad de Vanderbilt, 2010; 2012) o aproximadamente lo mismo (GCB, 2013) que

Cuadro 1.

Teorías que analizan si las mujeres son menos corruptas que los hombres

Teoría	Efecto ^a
Esencialista	Más mujeres en puestos de toma de decisiones se traduce en menos corrupción
Institucionalista	El tipo y la calidad de las instituciones democráticas condicionan la relación entre género y corrupción
Socialización	Las mujeres son más reacias al riesgo y ejercen un mayor autocontrol
Exposición	Las mujeres tienen menos acceso a redes corruptas y es menos probable que los hombres paguen sobornos a mujeres

Fuente: Tabla adaptada de Grimes y Wängnerud (2015).

^a Aunque sigue sin resolverse el debate sobre si la presencia de mujeres en la política y la administración pública conduce a un menor nivel de corrupción, es importante señalar que la base de la participación de las mujeres en las estructuras de gobernanza en todos los niveles es una cuestión de derechos humanos universales y una causa en sí misma. De hecho, justificar la inclusión de las mujeres sobre la base de un argumento instrumentalista a favor de un gobierno ético podría resultar contraproducente a medida que salieran a la luz casos de mujeres involucradas en actos de corrupción.

las mujeres. Sin embargo, los promedios mundiales pueden enmascarar diferencias significativas entre los países. Por ejemplo, el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional muestra que el 27% de las mujeres colombianas dijo haber pagado sobornos en comparación con el 16% de los hombres (Ibíd.). Las tasas también varían de un sector a otro, como lo demuestra un estudio sobre la corrupción en las oficinas de propiedad pública de Bangladesh, donde las barreras sociales y culturales obligan a las mujeres a trabajar a través de intermediarios y a pagar sobornos en mayor proporción que los hombres (Transparencia Internacional, 2015).

Sin embargo, hay consenso en al menos un punto: los efectos de la corrupción golpean de manera desproporcionada a los pobres, y las mujeres se ven particularmente afectadas debido a sus mayores tasas de pobreza³ y su responsabilidad en el cuidado de la familia. La vulnerabilidad femenina es especialmente aguda en los casos de “corrupción por necesidad” (Bauhr, 2012; Bauhr y Wängnerud, 2016), en cuyo caso los sobornos suelen estar vinculados a los servicios básicos (Asiedu, 2016).

El costo de los sobornos recae con mayor dureza sobre quienes tienen menos posibilidades de pagarlos. Un estudio realizado en México demostró que un tercio de los ingresos de las familias más pobres se gasta en el pago de sobornos (Steiner, 2017). Ese “impuesto” ilegal limita la capacidad de los hogares para satisfacer otras

³ Esta proporción representa el 70% de la población pobre a nivel mundial y el 65% de la población analfabeta (Lim, 1996).



necesidades básicas esenciales, en particular para los hogares encabezados por mujeres, que tienen más probabilidades de ser extremadamente pobres en comparación con los hogares encabezados por hombres.⁴

En América Latina la corrupción en el sector público es prevalente —hasta un 20 % de los encuestados que utiliza servicios de salud informa haber pagado sobornos (Pring, 2017)— y a menudo obedece a motivos de género. Estudios llevados a cabo en Nicaragua pusieron de manifiesto que el hecho de que las mujeres tengan una mayor dependencia del sistema de salud pública, particularmente durante sus años reproductivos, las hace más vulnerables a la corrupción en ese sector (Transparencia Internacional, 2014). En algunos casos, las mujeres pobres se ven obligadas a pagar sobornos al personal de salud, incluso en situaciones que suponen un riesgo vital, como partos complicados o enfermedades graves de los niños (PNUD y UNIFEM, 2010: 5).

Cuando la corrupción desvía recursos de los servicios públicos, las mujeres también sufren más las consiguientes reducciones en calidad y cantidad. Un estudio realizado a partir de datos de 21 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el período comprendido entre 1998 y 2011 mostró que la corrupción conllevaba una reducción del gasto público en materia de educación y salud (Jajkowicz y Drobistzova, 2015). La corrupción en el sector del agua y el saneamiento también tiene un impacto de género, dada la responsabilidad tradicional de las mujeres de transportar agua, lavar y cocinar (Cap-Net y GWA, 2014). En una encuesta sobre los efectos de la corrupción, mujeres de organizaciones comunitarias femeninas destacan la falta de provisión de bienes y servicios públicos como “una causa, consecuencia y componente intrínseco de las prácticas corruptas” (PNUD, 2012: 3).

El aumento de la tasa de participación de la mujer en el sector no estructurado es otro factor que afecta a los niveles de vulnerabilidad. Una investigación realizada en Uganda muestra que el 43 % de las mujeres propietarias de negocios reportó acoso (como amenazas de cierre y demandas de sobornos e impuestos recaudados ilegalmente) por parte de funcionarios corruptos, en comparación con el 25 % entre todos los propietarios de negocios (Ellis, Manuel y Blackden, 2006).

La corrupción puede tener asimismo impactos de género en el sector económico formal. En contextos en los que los procesos de adquisiciones o los servicios empresariales se aceitan mediante la corrupción, las mujeres pueden estar en desventaja

⁴ Los hogares urbanos con niños donde una mujer es jefa de hogar tienen un tercio más de probabilidades de ser extremadamente pobres en comparación con los hogares encabezados por un hombre (20 % frente a 15 %) (Banco Mundial, 2012).

debido a la percepción de que son menos corruptibles o a su acceso más limitado a las redes corruptas de amiguismo (Transparency Rwanda, sin fecha).

Los desequilibrios de género también se manifiestan en el caso de sistemas judiciales corruptos, lo que puede servir “para reforzar la discriminación existente, de manera explícita e implícita” (Transparencia Internacional, 2014: 5). Cuando las mujeres carecen de recursos, sus derechos civiles pueden quedar desprotegidos en cuestiones clave como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, el derecho a la tierra, la independencia financiera y la seguridad personal (Ibíd.). Con frecuencia se producen sobornos a agentes de policía para proteger a los perpetradores de actos criminales contra las mujeres (Transparencia Internacional, 2010). Incluso la percepción de corrupción en los tribunales es suficiente para que las mujeres tengan menos propensión a denunciar la violencia o a participar en un pleito (ONU Mujeres, 2012). Esto puede ser particularmente cierto en casos de violencia doméstica, donde la retirada de los cargos puede dejar a la mujer en mayor riesgo de ser víctima de su abusador.

Trabajos recientes han dado un nuevo giro a la investigación fundamental del Banco Mundial (Dollar, Fisman y Gatti, 1999) que mostró que una mayor presencia femenina en la política conduce a reducir la corrupción. Estudios subnacionales sobre Europa y México invierten la relación, afirmando que es la presencia de corrupción lo que limita el número de mujeres en la política (Sundström y Wängnerud, 2016). Es decir, hay menos mujeres políticas en gobiernos corruptos porque la selección tiene lugar a través de procesos opacos, clientelistas, basados en el amiguismo y dominados por hombres. En algunos casos, la brecha de género en contextos corruptos puede estar relacionada con desequilibrios en el acceso al financiamiento político (corrupto) fuera de las reglas de financiamiento de campañas o en caso de que dicho financiamiento sea proporcionado por actores ilícitos.

2.3 La explotación sexual como forma de corrupción

La mayor vulnerabilidad de las mujeres a la explotación sexual produce una forma de corrupción motivada por el género. El término “sextorsión” fue acuñado por la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Se refiere a la demanda de favores sexuales por parte de hombres en posiciones de poder. En algunos casos, las mujeres pueden sufrir abusos sexuales como condición para recibir servicios públicos (PNUD, 2014a: 14). La sextorsión parece ser particularmente común en el sistema educativo, donde suele presionarse a niñas y mujeres para que tengan relaciones sexuales con el fin de lograr un aprobado.

La minería ilegal ilustra las complejidades y conexiones entre corrupción y género. Existen datos de estudios realizados en Perú que indican que en el pueblo de minería ilegal Delta 1 había cerca de 2.000 trabajadoras sexuales, de las cuales el 60 % era menor de edad. Estas operaciones mineras ilegales también presentaban otras externalidades negativas (de género), como el vertido de más de 30 toneladas de mercurio en ríos y lagos de la región cada año, generando niveles hasta 34 veces más altos que el límite seguro para las mujeres en edad fértil. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) estima que a través de la ciudad de Lima se transportaron 35 toneladas de oro de contrabando hacia Suiza y Estados Unidos entre febrero y octubre de 2014.

Fuente: Bird y Krauer (2017).

La corrupción por motivos de género también es común en el lugar de trabajo, donde los procesos de recursos humanos (como la contratación, los salarios o la retención) pueden estar condicionados al acoso sexual. Un estudio realizado en Ruanda reveló que las mujeres representaban el 84,5 % de las víctimas de corrupción por motivos de género en el lugar de trabajo, en comparación con el 15,5 % de los hombres (Transparency Rwanda, sin fecha).

Además, la trata de personas⁵ —en la que el 80 % de las víctimas son mujeres (Boehm y Sierra, 2015)— depende de la corrupción de los sistemas judiciales y de policía. La trata suele estar estrechamente vinculada a otros negocios ilícitos y a diversos impactos sociales negativos.

La sextorsión es una forma de corrupción particularmente difícil de medir y abordar. En general, las definiciones y los marcos jurídicos son inadecuados; “al tener elementos tanto de la corrupción como de explotación sexual, la sextorsión a menudo escapa al enjuiciamiento por uno y otro delito” (Thompson Reuters Foundation, 2015: 28). La falta de información también es un obstáculo en el sentido de que las víctimas podrían evitar denunciar los abusos debido a la percepción errónea de que estas situaciones implican alguna forma de consentimiento o debido a la falta

⁵ La trata de personas se define como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (UNODC, 2004: Artículo 3, Protocolo contra la trata de personas).

de claridad con respecto a los procesos de denuncia (Ibíd.). Por último, también son escasos los datos sobre las dimensiones completas de la extorsión sexual y la capacidad de respuesta, en razón de los estigmas sociales y la profunda marginación de las víctimas (PNUD, 2014: 14).

2.4 ¿Reaccionan los hombres y las mujeres de manera diferente ante la corrupción?

2.4.1 Recurso legal

Hay datos diversos en torno a la cuestión de si son los hombres o las mujeres quienes toleran menos la corrupción (GCB, 2013; Transparencia Internacional, 2007). En cualquier caso, es probable que las diferencias dependan del contexto. Un estudio reveló que las mujeres condenan la corrupción en una tasa más elevada que los hombres solo en las democracias, donde la corrupción está estigmatizada en mayor grado (Esarey y Chirillo, 2013). Otra teoría postula que las mujeres tienen menor tolerancia debido a su propia exclusión para poder participar o beneficiarse de la corrupción (Bauhr y Wängnerud, 2016); es decir, las mujeres tienen menos probabilidades de tolerar la corrupción porque “son los excluidos del sistema los que tienen incentivos para provocar el cambio, mientras que los que tienen acceso al poder generalmente se benefician de mantener un sistema excluyente” (Grimes y Wängnerud, 2016).

Una investigación llevada a cabo por Transparencia Internacional reveló que las mujeres solo representan el 38% de las denuncias relacionadas con la corrupción recibidas por sus Centros de Asistencia Jurídica Anticorrupción que operan en más de 60 países de todo el mundo (Transparencia Internacional, 2014: 5-6). En Uganda los grupos focales observaron que las mujeres eran menos propensas a denunciar la corrupción en parte porque estaban menos informadas de los canales y porque percibían que se trataba de un rol que les correspondía a los hombres (Nordic Consulting Group, 2009: 25).

La brecha de género en los cargos públicos también puede poner a las mujeres en desventaja a la hora de pedir cuentas a los funcionarios corruptos. En la medida en que las mujeres están subrepresentadas en la administración pública, los funcionarios varones pueden “retorcer deliberadamente y complicar los procesos gubernamentales para las mujeres”, de manera que estas tienen menos probabilidades de denunciar la corrupción (Transparencia Internacional, 2010). Los funcionarios corruptos aprovechan la vulnerabilidad de las mujeres en su beneficio, centrándose en

ellas en lugar de hacerlo en los hombres, “posiblemente porque consideran que las mujeres son más sensibles a la coacción, la violencia o las amenazas, o menos conscientes de dónde o cómo presentar una denuncia” (PNUD, 2008).

Las disparidades de género en el acceso a la información también representan un desafío para avanzar en la lucha contra la corrupción. Un estudio mundial dejó al descubierto una brecha de género (un 42% de hombres frente a un 36% de mujeres) en los niveles de concienciación con respecto al acceso al derecho a la información (Proyecto Mundial de Justicia, 2015). La gran variedad de desafíos que implica salvar esa brecha se ha resumido en los siguientes elementos: capacidad, dinero en efectivo, cuidado de niños, confianza, control, conciencia, cultura y miedo (Neuman, 2016). No es de extrañar que el acceso a la información tenga un impacto significativo en los esfuerzos anticorrupción. De acuerdo con un trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (PNUD, 2012), las mujeres que conocían la existencia de leyes y fondos anticorrupción en su país informaron haber luchado contra la corrupción en mayor proporción (63%) que las que carecían de dicha información (34%).

La brecha digital —incluido el acceso a Internet y las competencias en el campo informático— podría explicar en parte el desequilibrio de género en el acceso a la información. Investigaciones realizadas en 86 países han revelado que las estrategias nacionales en materia de tecnología de la información y la comunicación (TIC) suelen incluir compromisos retóricos en cuanto a la igualdad de género, aunque carecen de compromisos concretos y de los recursos necesarios para hacerlos realidad (World Wide Web Foundation, 2015). Una encuesta realizada en 10 países de África, Asia y América Latina descubrió que las mujeres encuestadas tenían un 50% menos de probabilidades que los hombres de usar Internet, y entre un 30% y un 50% menos de probabilidades de hacerlo con fines de empoderamiento político o económico (World Wide Web Foundation, 2008–2018).

2.4.2 Protección jurídica

La legislación sobre denunciantes de irregularidades representa una protección clave para garantizar que los empleados que denuncian la corrupción estén protegidos contra el despido, el descenso de categoría o el acoso.⁶ Si bien la Convención de

⁶ Transparencia Internacional define la denuncia de irregularidades “como la revelación o denuncia de conductas impropias tales como la corrupción, los delitos, el incumplimiento de obligaciones legales, los errores judiciales, los peligros específicos para la salud pública, la seguridad o el medio ambiente, el abuso de autoridad, el uso no autorizado de fondos o bienes públicos, el despilfarro o la mala administración, los conflictos de intereses y los actos para encubrir cualquiera de tales hechos”.

las Naciones Unidas contra la Corrupción exige que los países consideren la adopción de legislación en materia de denunciantes de irregularidades, un estudio reveló que solo cuatro de los 23 países de la Unión Europea contaban con marcos jurídicos considerados exhaustivos (Transparencia Internacional, 2013). En América Latina la protección de los denunciantes de irregularidades es la excepción, más que la norma, aunque parece ir ganando impulso.⁷ La protección de los denunciantes tiene claras implicaciones de género en los casos de sextorsión o acoso sexual en el sector público. También puede haber diferencias de género en cuanto a las consecuencias para los denunciantes. Al menos un estudio concluyó que las mujeres denunciantes informaron haber sufrido represalias por parte de sus supervisores (como revisiones de desempeño deficientes, acoso e intimidación) en una proporción mayor que los hombres (Levinson, 2008).

Lecciones de la investigación:

- Los datos sobre si las mujeres son menos corruptas que los hombres resultan contradictorios. En contextos donde ellas parecen ser menos corruptas, es probable que eso se deba a factores institucionales o culturales específicos más que al argumento esencialista según el cual las mujeres son el sexo más ético.
- Existe consenso en cuanto a que la corrupción tiene efectos de género, y se piensa que las mujeres sufren más los impactos negativos debido a factores interrelacionados de mayores tasas de pobreza, responsabilidad por el cuidado de la familia, dependencia de los servicios públicos y condiciones de discriminación y marginación.
- La mayor vulnerabilidad de las mujeres a la explotación sexual aumenta su riesgo de sufrir tres formas de corrupción altamente sexistas: la sextorsión, la trata de personas y el acoso sexual.
- Aunque los datos son escasos, las mujeres parecen denunciar la corrupción con menos frecuencia que los hombres, y se considera que uno de los obstáculos para ello son los desequilibrios de género en el acceso a la información. Se necesita más investigación para asegurar que la protección de los denunciantes esté diseñada de modo de atender las necesidades tanto de las mujeres como de los hombres.

⁷ Argentina, México y Perú han promulgado leyes sobre denunciantes de irregularidades en los últimos años, aunque se considera que los marcos legales son limitados y carecen de una aplicación coherente.

Preguntas clave para incorporar la perspectiva de género en todos los pilares del Fondo

CAPÍTULO

3

Como se señala en la Política de Género del BID, todas las intervenciones del Banco (préstamos y cooperación técnica) que incluyan un resultado relacionado con el género en su matriz de resultados o que estén alineadas estratégicamente con la Política de Género —al margen del sector, tipo y tamaño— deberían contener un análisis de género para dar cuenta de la definición del problema y de su solución. Dicho análisis debe llevarse a cabo durante las etapas iniciales del proyecto, con el fin de identificar cualquier desequilibrio de género y su impacto en los resultados del proyecto, así como cualquier riesgo potencial en función del género. Los equipos del proyecto son responsables de realizar ese diagnóstico, que puede integrarse en los análisis más generales del problema y de los beneficiarios. Un análisis de género puede basarse en una serie de procesos diferentes, que pueden abarcar una investigación bibliográfica del equipo del proyecto, estudios a fondo realizados por un consultor especializado o consultas con las partes interesadas.

Este capítulo ofrece una serie de preguntas clave que pueden aplicarse a los proyectos del Fondo en los cuatro pilares,⁸ y que son coherentes con el principio rector de “transparencia focalizada”.

3.1 ¿Se benefician del proyecto las mujeres y los hombres por igual? ¿Cómo es posible saberlo?

En línea con la Sección 4.8 de las Directrices Operativas del BID en materia de género, que exige la definición de los resultados relacionados con el género (productos, resultados o insumos) e indicadores para medirlos, los proyectos de transparencia deben tener en cuenta y priorizar el tratamiento de las formas de corrupción

⁸ Pueden verse más recursos sobre la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de proyectos en Powell (2017) y PNUD (2010; 2014b).

que más afectan a las mujeres.⁹ Por ejemplo, en el sector de seguridad ciudadana, esto podría entrañar el prestar especial atención a la transparencia al preparar informes relacionados con la violencia de género o las agresiones sexuales. También cabe mencionar un proyecto sobre la presentación de informes en materia de inversión pública, que podría incluir información acerca de los gastos en el sector de la salud reproductiva.

Para ello, los proyectos necesitan herramientas e instrumentos específicos que permitan analizar el impacto de la corrupción desde una perspectiva de género. Además de los resultados relacionados con el género, los proyectos deben incluir datos desagregados por sexo a todo nivel —indicadores y datos de referencia— para identificar cualquier posible brecha de género.¹⁰

3.2 ¿Las mujeres proporcionan y tienen acceso a la información?

Los proyectos de transparencia deben reflejar una comprensión de cómo diversos grupos toman decisiones con el fin de “adaptar los sistemas de transparencia para proporcionar nuevos datos en el momento, lugar y formato que sean convenientes” (Fung et al., 2007). Este concepto es relevante de varias maneras en el caso del género y la transparencia. Por ejemplo, las disparidades de género en el acceso a Internet o en las competencias digitales pueden afectar a la capacidad de las mujeres para acceder a los datos de gobierno abierto o participar en procedimientos administrativos simplificados de gobierno electrónico.

Además de garantizar que las mujeres tengan acceso a la información, los proyectos de transparencia también han de facilitar la capacidad de las mujeres para denunciar casos de corrupción. En todos los pilares, los proyectos deben considerar mecanismos de denuncia que sean accesibles, seguros y fáciles de usar tanto para hombres como para mujeres. Para velar por que tales mecanismos respondan a las cuestiones de género, quizás haya que ajustar o reforzar los mecanismos de protección, como los programas de denuncias de irregularidades.

⁹ Como se detalla en el capítulo 2, los tipos de corrupción que pueden afectar de manera desproporcionada a las mujeres son numerosos, en particular actos de corrupción menores vinculados a la prestación de servicios, las regulaciones relacionadas con la economía informal, la extorsión sexual, la trata de personas y la corrupción judicial sobre la violencia de género, la tenencia de la tierra, y el divorcio y similares.

¹⁰ Según lo dispuesto en la Sección VI(b) de BID (2013).

3.3 ¿Las mujeres tienen voz en la toma de decisiones? ¿Existen oportunidades para involucrar a las organizaciones de mujeres?

Es más probable que los proyectos de transparencia reflejen las necesidades tanto de las mujeres como de los hombres si la toma de decisiones está equilibrada en relación con el género. Las mujeres deben tener la oportunidad de hacer aportes constructivos y de ejercer su influencia en la identificación, el diseño y la implementación de proyectos de transparencia, así como también participar de los comités directivos o de supervisión.

La participación de organizaciones de mujeres puede contribuir a hacer que los proyectos lleguen a las mujeres y a otros grupos marginados. He aquí algunas de las formas en que las organizaciones de mujeres pueden respaldar una participación equilibrada de género en los proyectos anticorrupción:

- Asegurar que la información en materia de transparencia llegue a las mujeres. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden ayudar en el diseño o la implementación de campañas de concienciación sensibles al género.
- Velar por que las mujeres participen del suministro de los datos utilizados en los proyectos de transparencia. Dentro de los proyectos comunitarios, las OSC pueden facilitar espacios donde las mujeres se sientan empoderadas para realizar aportes relacionados con la planificación y presupuestación, por ejemplo.
- Reforzar la sostenibilidad de los proyectos. Habida cuenta de los desafíos asociados con el mantenimiento de los proyectos de transparencia —tanto desde el punto de vista de la voluntad política como de la tarea de mantener los datos actualizados—, la participación de grupos de usuarios comprometidos puede ayudar a asegurar que los proyectos de transparencia sean “más sostenibles cuando los grupos de defensa y promoción tienen un incentivo para mantenerlos y mejorarlos” (Fung et al., 2007).

3.4 ¿Presenta el proyecto riesgos de género?

De acuerdo con el Plan de Acción de Género del BID, el diseño del proyecto también debe analizar si las actividades propuestas presentan impactos potenciales para mujeres y hombres. Además de velar para que las actividades se ajusten a la

legislación nacional aplicable en materia de igualdad entre ambos sexos, en el diseño también se ha de evaluar en qué medida el proyecto plantea posibles riesgos de género.¹¹ El análisis de riesgos es particularmente importante en las siguientes áreas clave (BID, 2013):

- Oportunidades económicas
- Derechos de propiedad
- Violencia de género

3.5 ¿Llega el proyecto a mujeres de distintas identidades sociales, económicas, étnicas y raciales?

De acuerdo con el compromiso del BID con la diversidad (BID, 2017), cabe reconocer que la experiencia de las mujeres con la corrupción variará enormemente en función de factores como la raza, el origen étnico, la edad, la religión y los ingresos. La vulnerabilidad a la corrupción es más aguda para aquellas mujeres que ya enfrentan otros tipos de discriminación que las privan de poder político y económico. Esas desigualdades intersectoriales están relacionadas con la transparencia de varias maneras. El acceso a Internet —y, por extensión, a la información de gobierno abierto— varía mucho según el grupo social y económico, tal como sucede, por ejemplo, en Brasil, donde la conectividad para el quintil más rico es del 75% en comparación con solo el 5% para el quintil más pobre (Bianchi, 2015).

La edad es otro factor, ya que el nivel de vulnerabilidad de una mujer a la corrupción puede variar a lo largo de su vida. Por ejemplo, una encuesta reveló que las mujeres eran más propensas a denunciar que se les había propuesto un soborno entre los 30 y los 59 años de edad, tal vez debido a su papel como cuidadoras y organizadoras del hogar durante ese período de la vida (PNUD, 2013). Aunque los datos al respecto son escasos, también es probable que la población indígena y afrodescendiente sea más vulnerable a la corrupción y no se les haga justicia, en razón de sus mayores niveles de pobreza y de la discriminación que persiste en muchos contextos.

¹¹ Por ejemplo, como se verá más adelante, los esfuerzos para mejorar la diligencia debida deberían incluir un análisis de género de los riesgos que supone para la inclusión financiera de las mujeres.

Resumen: Preguntas clave para la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de transparencia

- ¿Las mujeres proporcionan y tienen acceso a la información?
- ¿Existen oportunidades para involucrar a las organizaciones de mujeres?
- ¿Qué información específica de género se recopila?
- ¿Identifica el proyecto riesgos específicos de género?
- ¿Llega el proyecto a mujeres de distintas identidades sociales, económicas, étnicas y raciales?

Incorporación de la perspectiva de género por pilar del Fondo de Transparencia

Si bien las preguntas del capítulo 3 son pertinentes para todos los tipos de proyectos de transparencia, también existen desafíos y oportunidades específicos para cada uno de los cuatro pilares. Como se señala más adelante, el Fondo ya ha integrado la incorporación de la perspectiva de género en algunos de sus proyectos. Este capítulo se basa en las experiencias del BID y del Fondo, los conocimientos aportados por especialistas del BID, la literatura académica y las buenas prácticas internacionales para ofrecer ejemplos, por pilar, de temas a tener en cuenta para la promoción de la transparencia y la igualdad de género.

4.1 Integridad financiera

4.1.1. Lucha contra el lavado de dinero

El objetivo de los proyectos del Fondo en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero es fortalecer la capacidad de los países miembros para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se hace hincapié en las 40 recomendaciones de las normas para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

4.1.1.1 Conexión entre la trata de personas y el lavado de dinero

En el marco de las Recomendaciones del GAFI, el Fondo ha apoyado a los países miembros en el diseño y la implementación de enfoques basados en el riesgo ligado al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. De las numerosas clases de negocios ilícitos que existen, la trata de personas es uno de los más importantes, con ingresos anuales mundiales estimados en US\$32.000 millones (Sellar, 2017).

El lavado de dinero desempeña un papel fundamental en las operaciones de trata de personas, y las experiencias internacionales demuestran que el rastreo y la incautación de dinero es una de las formas más efectivas de desbaratar a las redes

criminales de trata (OSCE, 2014). Este enfoque requiere involucrar a las autoridades que intervienen en la lucha contra el lavado de dinero desde las etapas más tempranas de una investigación de trata de personas y concienciar o capacitar a esas autoridades en torno a modelos de negocios, mercados y mecanismos para el movimiento de fondos ilícitos de la trata de personas (Ibíd.).

Hay una serie de recomendaciones del GAFI relevantes para las iniciativas de lucha contra la trata. Por ejemplo, de acuerdo con un informe del grupo mencionado, las recomendaciones especiales VI, VII y IX son particularmente esenciales para asegurar que se identifiquen e incauten los ingresos de la trata; del mismo modo lo son las recomendaciones 13, 26 y 27, que hacen hincapié en el desempeño de las unidades de inteligencia financiera y en la calidad de los informes sobre transacciones sospechosas (GAFI, 2011). La cooperación transfronteriza es fundamental en la lucha contra el lavado de dinero asociado a la trata de personas, ya que la operación puede involucrar a los reclutadores en el país de origen, los transportistas que se mueven entre países y los explotadores dentro del país de destino.¹²

Hasta 2017 el Fondo había prestado asistencia técnica para la evaluación nacional de riesgos en nueve países y para la elaboración de planes de acción nacionales en dos países (Trapnell, 2017: 53). Sobre la base de esta experiencia, el Fondo podría trabajar con los países miembros para integrar un análisis de los ingresos derivados de la trata de personas en los futuros procesos de evaluación y planificación. Puede optar por dar prioridad a los países de origen conocidos como fuentes de altas proporciones de víctimas de trata, aunque el apoyo también puede dirigirse a los países de transporte y de origen, un listado del que ninguna nación está exenta. Los esfuerzos también podrían centrarse en la cooperación internacional en materia de lucha contra el lavado de dinero y la trata de personas, así como en la inversión estratégica para centrar la atención de las unidades de inteligencia financiera (UIF) en la investigación financiera especializada relacionada con el lavado de dinero.

4.1.1.2 Salvaguardias para la inclusión financiera

Existe la preocupación de que los requisitos en materia de lavado de dinero que recaen sobre las instituciones financieras puedan excluir de forma involuntaria a las empresas y a los consumidores legítimos. Esto puede suceder si los bancos comienzan a

¹² El tráfico transfronterizo dentro de América Latina y el Caribe es significativo, ya que representa el 22% de los flujos detectados en América del Sur, por ejemplo. Alrededor del 40% de las personas condenadas en los países de destino por trata transfronteriza en 2014 no eran ciudadanos del país en el que fueron condenadas (UNODC, 2016).

Buenas prácticas

En 2011 México aprobó un esquema escalonado para las nuevas cuentas bancarias que incluye requisitos menores para las cuentas de bajo valor. Estos requisitos de controles del tipo “conozca a su cliente” basados en el riesgo han permitido el acceso a cuentas de bajo riesgo con límites de saldo máximo de aproximadamente US\$400. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), durante el primer año de existencia del programa se crearon 6,7 millones de nuevas cuentas de bajo riesgo.

Fuente: Lewis, Villaseñor y West (2015); Thomas y Ioannides (sin fecha).

exigir formas diversas o costosas de identificación del cliente, o si el precio de los servicios aumenta, dados los costos asociados con el cumplimiento de las obligaciones en materia de lavado de dinero. Ya que las mujeres constituyen un porcentaje más elevado entre las personas excluidas desde el punto de vista económico, se ven especialmente afectadas por cualquier aumento de los requisitos o los costos.¹³

En consonancia con el compromiso del BID de procurar salvaguardias para evitar efectos adversos, las actividades en materia de lavado de dinero del Fondo podrían colaborar con los países miembros y las instituciones financieras con el fin de desarrollar opciones simplificadas para conocer al cliente, de acuerdo con el perfil del posible cliente (GAFI, 2013). Además, el BID puede trabajar con los reguladores para garantizar que se definan sanciones de acuerdo con el principio de proporcionalidad, de manera que las instituciones financieras no se muestren demasiado reticentes a trabajar con clientes de menor tamaño (Gelb, 2016).

4.2 Sistemas de control

En el marco de este pilar, el Fondo apoya a los gobiernos miembros de América Latina y el Caribe en la mejora de las prácticas de auditoría y control mediante el uso de: a) herramientas de auditoría basadas en el riesgo, b) marcos reglamentarios reforzados, c) sistemas de intercambio de información, d) auditorías de rentabilidad, y e) diálogo y generación de conocimientos. El Fondo ha desempeñado un papel

¹³ El Banco Mundial estima que la brecha de género en la inclusión financiera de los países en desarrollo es de 9 puntos porcentuales: el 59% de los hombres informó tener una cuenta en 2014, en comparación con el 50% de las mujeres (Banco Mundial, 2014).

Buenas prácticas

Entre 2012 y 2014 la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores apoyó una auditoría coordinada sobre igualdad y equidad de género, que incluyó el diseño y la implementación de las siguientes auditorías con perspectiva de género:

- Análisis de las funciones de la División de Planificación, Control y Acción Afirmativa de la Defensoría de la Mujer por parte de la entidad fiscalizadora superior de Puerto Rico.
- Revisión del Programa de Apoyo a la Retención Escolar, así como del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes por parte de la entidad fiscalizadora superior de Chile.
- Análisis del cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género (2007–2017) por parte de la entidad fiscalizadora superior de Costa Rica (OLACEFS, sin fecha).

decisivo en la adopción de las normas existentes, así como en la mejora de la capacidad en el 86% de los países que reciben asistencia (Trapnell, 2017). En particular, el Fondo prioriza los proyectos y el intercambio de conocimientos que exceden a las auditorías reglamentarias o financieras más tradicionales para examinar la economía, la eficiencia y la eficacia mediante auditorías de rendimiento.

4.2.1 Auditorías de igualdad de género

A partir de su experiencia en la prestación de asistencia técnica para la gestión innovadora de las auditorías, el Fondo podría apoyar el fortalecimiento de la capacidad de las entidades fiscalizadoras superiores para evaluar en qué medida los gobiernos han institucionalizado políticas, programas y presupuestos con perspectiva de género. Existen varios posibles puntos de entrada para este tipo de enfoque. Por ejemplo, las entidades fiscalizadoras superiores podrían evaluar la capacidad del gobierno para cumplir con las obligaciones de igualdad de género asociadas con los ODS. Además, una entidad fiscalizadora superior podría aplicar una perspectiva de género a la auditoría de un programa público examinando el nivel de datos desagregados por sexo que se hayan recopilado y las diferencias de género con respecto a los obstáculos e impactos del programa.

4.2.2 Sistemas de denuncia sensibles al género

Otro ámbito que podría incluirse en el pilar de los sistemas de control sería un sistema integrado de denuncias dentro de la administración pública nacional. Dicho

sistema contendría un mecanismo único accesible y transparente para recibir, registrar y dar seguimiento a las denuncias de corrupción (*La República*, 2017). La incorporación de la perspectiva de género en este contexto entrañaría un seguimiento desglosado por sexo de las denuncias y el tipo de resolución para garantizar que las mujeres puedan aprovechar plenamente el sistema. Los procedimientos y la protección de los denunciantes se extenderían también necesariamente a las áreas de acoso sexual y discriminación por razones de sexo.

La experiencia internacional en el sector seguridad ofrece una serie de buenas prácticas para garantizar que los sistemas de denuncia tengan en cuenta las cuestiones de género, como en Bastick (2014; 2015):

- Información sobre el procedimiento de denuncias que se muestra en las oficinas gubernamentales y otras áreas comunitarias y que se proporciona a las organizaciones de mujeres.
- Múltiples maneras de presentar denuncias, como un número de teléfono gratuito y mensajes de texto o de correo electrónico.
- Una funcionaria disponible para recibir las denuncias de las mujeres o niñas.
- Requisitos que estipulen que el personal no puede rechazar una denuncia ni intentar disuadir a una persona de presentarla.
- Sistemas de registro que identifiquen si el demandante tiene alguna relación con el presunto abusador.
- Posibilidad de presentar una denuncia en su propia lengua.
- Procedimientos que permitan al denunciante presentar una denuncia anónima.
- Posibilidad de que la denuncia sea presentada por la pareja, un familiar, un amigo u otro representante de la víctima.
- Sistema con registros rastreables y confidenciales de todas las denuncias presentadas.
- Protección de los denunciantes, también contra reprimendas o despidos durante el proceso de presentación de denuncias.

4.3 Gobernanza de los recursos naturales

En el marco de este pilar, el Fondo se centra en potenciar la transparencia y el acceso a la información sobre los beneficios e impactos de las industrias extractivas. He aquí las cinco áreas de actividad de esta iniciativa: a) diagnósticos y planes de trabajo para implementar estándares de transparencia, tales como la Iniciativa para

la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE); b) uso de herramientas informáticas para publicar información sobre los beneficios y los impactos; c) apoyo a campañas de educación pública; d) apoyo para la revisión de códigos jurídicos, leyes y contratos relativos a la transparencia, y e) generación y difusión de conocimientos sobre transparencia en la industria extractiva.¹⁴

4.3.1 Negociaciones de contratos con perspectiva de género

En consonancia con la atención que presta el Fondo a la revisión de códigos jurídicos, leyes y contratos, se podría prestar apoyo para garantizar que las negociaciones de los contratos de los países miembros tengan en cuenta las cuestiones de género y sean transparentes. Esto podría incluir, por ejemplo, políticas de contenido local con objetivos de igualdad de género, cuotas para la participación de mujeres en los comités comunitarios de negociación y monitoreo, y actividades de inversión comunitaria que mejoren la capacidad de las empresas de propiedad de mujeres (Scott et al., 2013).

4.3.2 Análisis y cartografía de los impactos de las industrias extractivas

En Colombia el Fondo apoyó la creación de MapaRegalías para la visualización de información georreferenciada de las fuentes y usos de los ingresos por regalías. Sobre la base de esta experiencia, el Fondo podría apoyar un mapeo de los beneficios e impactos de las inversiones procedentes de las industrias extractivas que tome en consideración aspectos de género, en consulta con las comunidades y las OSC, y luego presentarla visualmente mediante una adaptación especial de la herramienta Mapalmpactos.

4.3.3 Planificación de género para el uso de los ingresos de las industrias extractivas

El Fondo ha apoyado la planificación para mejorar la gestión de los ingresos de las industrias extractivas en 10 países, incluyendo los compromisos relativos a la asignación de ingresos (Trapnell, 2017). Sobre la base de estas experiencias, el Fondo podría apoyar la capacidad de distribución de beneficios de las industrias extractivas, de modo que sea transparente y tenga en cuenta las cuestiones de género, a fin de garantizar que los recursos de ese sector satisfagan las necesidades de mujeres

¹⁴ Aunque hasta la fecha el BID no ha realizado trabajos relacionados con la minería informal o ilegal, debe considerarse que ambas tienen dimensiones de género merecedoras de atención.

y hombres por igual. También podría promover la inclusión de las mujeres en los grupos de múltiples interesados (*multi-stakeholder groups*) directos de la ITIE del país y en la supervisión de la implementación de esta iniciativa.

4.4 Gobierno abierto

En el marco de este pilar, el Fondo apoya proyectos encaminados a mejorar la capacidad de los gobiernos nacionales y subnacionales para crear y mantener plataformas de colaboración entre las partes interesadas, con el fin de mejorar los servicios públicos y la rendición de cuentas. Las principales áreas de actividad son: a) la provisión de información transparente y accesible; b) la participación ciudadana en el diseño, la implementación y el monitoreo de los servicios públicos; c) soluciones de gobierno electrónico para mejorar los servicios; d) la transparencia en las adquisiciones, la ejecución del presupuesto y la administración pública, y e) la aplicación de normas de ética pública y el fortalecimiento de los parlamentos.

4.4.1 Cumplimiento de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza está conformada por 70 gobiernos nacionales y 15 gobiernos subnacionales. En ella, los expertos han identificado diversas brechas de género: menos del 5% de los planes de acción nacionales tienen compromisos específicos en materia de género, y las mujeres están subrepresentadas en los comités nacionales de la Alianza (OPG, 2016). Habida cuenta de tales desequilibrios, el Fondo podría aprovechar su experiencia en el trabajo con países de América Latina y el Caribe en la planificación o implementación de los compromisos de la Alianza (Trapnell 2017: 78) para

Buenas prácticas

En 2008 el Ministerio de Energía Nueva y Renovable de la India llevó a cabo una auditoría de género en consulta con organizaciones de mujeres, grupos de la sociedad civil, medios de comunicación y otras partes interesadas. El estudio reveló que los proyectos modernos de energía renovable no beneficiaban de manera suficiente a las mujeres ni tampoco reunían datos desglosados por sexo. A través del proceso, las partes interesadas lograron una comprensión esencial del sector energético y datos para su mejora.

Fuente: Agora (sin fecha).

Buenas prácticas

Hay una serie de experiencias parlamentarias en el análisis legislativo con perspectiva de género. Por ejemplo, el proyecto de ley de presupuesto anual de Suecia se ha convertido en un “documento destacado y muy esperado”, que muestra cómo se distribuyen las asignaciones entre hombres y mujeres, y cuál es el impacto de los programas sociales en la reducción de la brecha de género. Por su parte, en España los presupuestos presentados al Parlamento van acompañados de una evaluación de impacto de género de conformidad con la Ley 30/2003.^a Por último, el Centro para el Adelanto de la Mujer del Parlamento mexicano es un órgano imparcial de investigación, encargado de revisar los proyectos de ley desde una perspectiva de género y de prestar asistencia técnica a los parlamentarios en el diseño de análisis sensibles al género.

Fuentes: Palmieri (2011); Juberto y O'Hagan (2010).

^a Ley sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno.

proporcionar asesoramiento sobre compromisos específicos de género, en particular en relación con el suministro de información relativa a sectores específicos, como el acceso a la justicia, los derechos en materia de salud reproductiva y sexual, los subsidios de bienestar social, los servicios y la economía informal. También se debe procurar aumentar la participación femenina (y de las organizaciones de mujeres) en los comités nacionales, así como promover campañas de comunicación especialmente dirigidas a garantizar que las mujeres estén informadas del proceso de la AGA.

4.4.2 Gobierno electrónico

En Uruguay el Fondo ha apoyado la digitalización y simplificación de 46 procesos administrativos. Se estima que 10 de ellos (que abordan cuestiones como denuncias de violencia doméstica, apoyo a la salud mental, servicios de emergencia sanitaria, y consulta y orientación a las víctimas de violencia) se centran en las necesidades y los intereses de las mujeres.¹⁵ Entre los proyectos futuros se podrían incluir la igualdad de género como criterio para determinar a qué servicios se debe dar prioridad con vistas a la simplificación. El diseño también debe tener en cuenta las diferencias de género en el acceso a Internet o la creación de centros de servicios electrónicos que sean seguros y accesibles para que los utilicen las mujeres. Por último, como parte

¹⁵ Entrevista con Nicolás Dassen, Especialista Senior del BID y Jefe de Equipo del Proyecto de Modernización del Estado (UR-T1122).

del compromiso del BID en materia de salvaguardias, los proyectos deben considerar hasta qué punto la simplificación administrativa puede tornar superfluos ciertos puestos de trabajo, así como cualquier impacto potencial en el empleo femenino en el sector público.

4.4.3 Presupuestación con perspectiva de género

Los recortes y las asignaciones presupuestarios pueden tener efectos muy diferentes en hombres y mujeres. Las investigaciones realizadas en el Reino Unido, por ejemplo, revelaron que sobre las mujeres recaía el 85% de los costos de los recortes de austeridad, y que desviar las inversiones de la construcción al sector de la atención generaría 1,5 millones de puestos de trabajo en lugar de 750 000 (The Economist, 2017). Proporcionar un análisis presupuestario imparcial, transparente y con perspectiva de género puede mejorar la calidad de la legislación y contribuir a una mayor igualdad de género.

Aprovechando el apoyo del BID en Argentina para mejorar el análisis técnico de los presupuestos, el Fondo podría respaldar el desarrollo de procedimientos y criterios para el análisis de presupuestos sensibles al género, diseñados para perfilar los impactos diferenciados proyectados de la legislación sobre hombres y mujeres. De manera similar, el trabajo del Fondo podría centrarse en los departamentos gubernamentales para mejorar el análisis de género y la presentación de informes sobre las asignaciones presupuestarias, utilizando indicadores de resultados desglosados por sexo.

4.4.4 Tecnología de la información y la comunicación: política e innovación

Un informe reciente sobre la corrupción en América Latina recomienda “democratizar el acceso a las nuevas tecnologías de la información”, dado el papel fundamental

Buenas prácticas

La Iniciativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Desarrollo en la Región Árabe apoya el desarrollo de servicios de gobierno electrónico para mejorar la rendición de cuentas, la eficiencia y la calidad de los servicios. También incluye un servicio especializado en cuestiones de género que se centra en el suministro de información jurídica sobre los derechos de la mujer, así como actividades de fomento de la capacidad para mejorar las competencias digitales.

Fuente: PNUD (2005).

que desempeñan Internet y las redes sociales en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas (Casas-Zamora y Carter, 2017: 45). Ese énfasis es coherente con las considerables inversiones del Fondo destinadas a promover la innovación y los servicios de gobierno electrónico. Sin embargo, a menos que se aborde la brecha digital de América Latina y el Caribe, esos programas corren el riesgo de reforzar las desigualdades de género existentes. Las mejoras en las políticas nacionales de TIC podrían fomentar la igualdad de acceso de las mujeres a la información. A este respecto, el Fondo podría considerar la posibilidad de apoyar el seguimiento transparente de la igualdad de género en la aplicación de las estrategias TIC mediante la inclusión de la recopilación de datos desglosados por sexo, la creación de comisiones de examen —constituidas por el gobierno, el sector privado y OSC (incluidos grupos de mujeres)— y el establecimiento de procesos de revisión periódica. De manera similar, los programas centrados en el fomento de innovaciones relacionadas con la transparencia podrían dar prioridad a la igualdad de género a través de incentivos o premios para proyectos que benefician a mujeres y niñas (Kenny y O'Donnell, 2017).

4.4.5 Nivelar las condiciones de competencia en materia de contratación pública

Las políticas que combinan la transparencia y la igualdad de género en los procesos de contratación pública pueden reforzarse mutuamente y traducirse en la inclusión de la mujer y una reducción de los costos. Por ejemplo, los procesos simplificados pueden restringir las oportunidades de corrupción y facilitar la participación femenina. Al mismo tiempo, las iniciativas resueltas para aumentar la conciencia de género de los funcionarios encargados de las adquisiciones del sector público, incrementar la información proporcionada a las mujeres empresarias y mejorar la capacidad de las mujeres para competir son instrumentos fundamentales para nivelar las condiciones de competencia y asegurar la diversificación de los licitadores. Con esto en

Buenas prácticas

Chile y República Dominicana han trabajado para ampliar la competencia en los procesos de contratación pública mediante la prestación de apoyo e incentivos destinados a aumentar el número de mujeres proveedoras. El programa de República Dominicana estipula una cuota del 20% para micro, pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres. ChileCompra incluye la aplicación de un mecanismo de certificación transparente (Sello Empresa Mujer) para empresas propiedad de mujeres y su incorporación en bases de datos públicas.

mente, el Fondo podría partir de los esfuerzos de la División de Gestión Fiscal y Municipal del BID para llevar a cabo evaluaciones de las prácticas de adquisiciones, que abarcaran el análisis de la transparencia, la inclusión de género y las tecnologías digitales, y para desarrollar conjuntos de herramientas y capacitación para los funcionarios de adquisiciones.

4.4.6 Diagnóstico de la función pública

El BID ha apoyado una serie de análisis diagnósticos integrales de la función pública de los gobiernos centrales en pro de una planificación y una gestión de recursos estratégicos más eficaces. Garantizar que se recopilen y se pongan a disposición del público datos sobre la fuerza de trabajo de la administración pública también promueve la rendición de cuentas y la toma de decisiones sobre la base de consideraciones de mérito (OCDE, 2017). Para asegurar que la contratación, la promoción, la compensación y la retención sean equitativas en cuanto al género, el Fondo podría apoyar la recolección, el análisis y la publicación de datos desagregados por sexo. Estos análisis de la fuerza de trabajo también proporcionarían una base para la evaluación comparativa de la igualdad de género. Además, el apoyo del BID al análisis y diseño de políticas y paquetes de jubilación anticipada es otra área clave para la recopilación y análisis de datos desagregados por sexo con el fin de identificar cualquier riesgo relacionado con el género y contribuir a la planificación y reestructuración de la fuerza laboral con una perspectiva de género.

4.4.7 Mapeo comunitario

El Fondo ha apoyado la elaboración participativa de geocartografía de las comunidades de asentamientos informales de la Argentina y Guyana. La información recopilada se utiliza para respaldar procesos de toma de decisiones transparentes en relación con los subsidios para mejoras en el hogar. A largo plazo, la información servirá también de base para elaborar políticas subnacionales y nacionales de vivienda. Las iniciativas de esta índole involucran una serie de dimensiones de género que deberían tenerse en cuenta para el diseño y la ejecución de otros proyectos futuros. En primer lugar, el componente de participación de la comunidad debería estructurarse de manera que las mujeres estén plenamente empoderadas para proporcionar datos y contribuir al proceso de toma de decisiones. En la medida de lo posible, la participación podría organizarse en torno a un formulario de calificación por parte de los ciudadanos (Björkman y Jakob Svensson, 2007). En segundo lugar, los criterios de subvención deben estar diseñados para promover la igualdad de género o, como mínimo, evitar que se refuercen los desequilibrios ya existentes. En particular,

Buenas prácticas

En varias ciudades del mundo se han desarrollado plataformas en línea que permiten a las mujeres denunciar de forma anónima el acoso o las condiciones de inseguridad, tales como HarassTracker en Líbano y HarassMap en Egipto. Como lo demuestra Safecity en la India, la información recopilada puede ser utilizada por los ciudadanos para definir prioridades y presionar a las autoridades locales para que realicen las mejoras necesarias; por ejemplo, mejor iluminación o mayor presencia policial y mensajes públicos, particularmente en áreas inseguras (Singh, 2018).

el proyecto prioriza el fomento de los subsidios para los hogares monoparentales. De manera inversa, el requisito del subsidio referente a la propiedad puede ir en contra de la igualdad de género, pues las mujeres tienen una mayor probabilidad de alquilar sus viviendas. Por último, será esencial desagregar por sexo los indicadores a lo largo de todo el proyecto.

4.4.8 Monitoreo del desempeño

Dentro del pilar del gobierno abierto, el Fondo ha trabajado para incorporar la transparencia en diversos sectores —en particular educación, salud y administración de la tierra— a fin de mejorar la prestación de servicios, aumentar la rentabilidad y reducir las oportunidades de corrupción. La integración de un enfoque de igualdad de género dentro de estos esfuerzos de incorporación de la perspectiva de género puede ayudar a asegurar que los programas respondan a las necesidades de mujeres y hombres. Por ejemplo, el apoyo del Fondo al informe *The State of Social Housing in Six Caribbean Countries* (McHardy y Donovan, 2016) incluye una revisión de los incentivos para la vivienda en relación con la transparencia (Trapnell, 2017). Si esta investigación incorporara el análisis de género —con datos desagregados por sexo sobre quiénes se benefician de las políticas de vivienda—, las medidas de política podrían diseñarse de modo de asegurar que las mujeres no enfrenten barreras desproporcionadas en términos de criterios de acceso, participación en el diseño de políticas o presentación de denuncias o quejas en caso de ineficiencia o corrupción.

4.4.9 Iniciativas FixMyStreet

En Uruguay el Fondo ha apoyado a PorMiBarrio (PorMiBarrio.uy), una iniciativa que permite a los ciudadanos comunicarse directamente con las administraciones municipales a través de teléfonos móviles o computadoras, y denunciar roturas en las calles, problemas de saneamiento, vandalismo u otros inconvenientes locales.

Igualmente importante es que el portal permite a los ciudadanos hacer un seguimiento de las respuestas municipales a las quejas. Sobre la base de esta iniciativa, el Fondo podría apoyar innovaciones en materia de incorporación de la perspectiva de género.

En primer lugar, en un espíritu de transparencia focalizada, el proyecto podría analizar quién está utilizando el servicio, ya sea pidiendo a los ciudadanos que especifiquen su sexo al presentar una solicitud o mediante encuestas públicas. Además, el servicio podría asociarse con organizaciones de mujeres para promover mejor su utilización por parte de las mujeres. Por último, podría permitirse la llegada de comentarios sobre los servicios públicos, especialmente en el caso de aquellos que son muy utilizados por las mujeres (por ejemplo, los servicios de salud o educación), o posibilitar que las mujeres (y los hombres) informen acerca de áreas en las que sufren acoso o se sienten inseguras.

4.4.10 Mejora del manejo de casos y de la transparencia en el Poder Judicial

A partir de los esfuerzos actuales del BID en Perú,¹⁶ el Fondo podría apoyar sistemas automatizados de manejo de casos de violencia de género a través de procesos simplificados y una mejor coordinación interinstitucional. La utilización de un sistema integrado de manejo de casos, que se utilizaría en todos los organismos, podría eliminar las oportunidades de corrupción mediante la protección de documentos, un examen más detenido de los procesos y la normalización de los honorarios de los tribunales.

Estos procesos simplificados de manejo de casos también podrían contribuir a mejorar la transparencia en el Poder Judicial, donde el movimiento en pro del gobierno abierto no ha ganado mucha fuerza hasta la fecha.¹⁷ El Fondo podría considerar la posibilidad de apoyar el programa de gobierno abierto centrándose en las cuestiones de género (por ejemplo, la violencia de género) y definir el tipo de información que ha de facilitarse en formatos abiertos, incluidos los fallos judiciales y las estadísticas sobre la resolución de casos, desglosados por tipo de tribunal y juez, entre otros. Otra posible área de apoyo abarca las plataformas en línea, a las que las víctimas de violencia de género pueden acceder para obtener información actualizada sobre

¹⁶ El BID apoya la iniciativa del gobierno de Perú para mejorar su capacidad de respuesta a la violencia de género a través de un mejor registro y monitoreo interinstitucional de casos.

¹⁷ Un ejemplo positivo es Argentina, donde el sistema de justicia ha desarrollado una plataforma electrónica con algunas decisiones judiciales, y donde la Corte Suprema se ha comprometido a utilizar nuevas tecnologías para mejorar los servicios de justicia.

sus casos, como las que se han desarrollado en Argentina, Chile y Colombia (Elena, 2015).

4.5 Sextorsión: una esfera emergente

Al combinar elementos de corrupción y explotación sexual, la sextorsión se muestra escurridiza ante las definiciones legales, la medición de casos y las soluciones fáciles. Aunque este fenómeno no encaja exactamente en ninguno de los cuatro pilares actuales del Fondo, sus devastadores efectos y su invisibilidad hacen que la transparencia se convierta en un imperativo. A continuación se tratan algunas áreas que explorar.

4.5.1 Recopilación de datos e investigación

Si bien esta forma de abuso de autoridad es un problema muy antiguo, se desconocen sus dimensiones. Se han llevado a cabo algunas investigaciones en África (Leach et al., 2003; Zicherman, 2006), aunque las formas y dimensiones de la sextorsión en América Latina han sido poco exploradas. Las encuestas, como el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, carecen actualmente de preguntas específicas acerca de este problema. La investigación podría incluir el diseño o la adaptación de herramientas de recolección de datos y monitoreo que capten la victimización por sextorsión.

4.5.2 Revisión y reforma del marco jurídico

Como forma de corrupción, en la que la moneda es el sexo y no el dinero, las leyes anticorrupción no suelen cubrir el abuso de la sextorsión. Al mismo tiempo, el hecho de que las leyes de violencia de género se centren en la violencia física o la fuerza puede hacer que se pasen por alto los casos de sextorsión, que se basan principalmente en el poder coercitivo de la autoridad (IAWJ, 2012). Como paso inicial clave para garantizar una mayor transparencia en relación con los casos de sextorsión, el Fondo podría apoyar una revisión de los marcos jurídicos actuales, su compatibilidad con el derecho internacional y las prioridades de la reforma.

4.5.3 Códigos de conducta

Aprovechando su amplia experiencia en la elaboración e implementación de nuevos códigos de conducta, lo cual incluye 255 organismos públicos de Chile (Trapnell, 2017: 80), el Fondo podría colaborar con los países miembros para examinar y enmendar

las normas éticas o los códigos de conducta profesional de los organismos gubernamentales a fin de incluir el abuso de la sextorsión.

4.5.4 Mecanismos de concienciación y denuncia

Una vez que haya una mejor comprensión de los desafíos en un país o una región específica, el Fondo podría considerar la posibilidad de apoyar actividades de toma de conciencia, de manera que “la gente reconozca que el problema existe, que la conducta es incorrecta y que hay un remedio disponible”. (IAWJ, 2012: 32). A partir de su experiencia en el desarrollo de un mecanismo electrónico de denuncias relacionadas con la prestación de servicios de salud pública (Trapnell, 2017: 91), el Fondo podría explorar opciones para ampliar los sistemas a fin de garantizar espacios seguros para denunciar el abuso de la sextorsión y crear conciencia sobre su existencia.

Buenas prácticas

Sobre la base de la unidad administrativa más pequeña (*barangay*) del país a la que las víctimas de sextorsión podrían acudir en primer lugar en busca de asistencia, los jueces de Filipinas organizaron seminarios para fomentar la capacidad de los dirigentes de los *barangay* para tramitar las denuncias de sextorsión con mayor eficacia. En Tanzania los jueces pusieron en marcha cursos de capacitación con personal no judicial en todos los centros de la Corte Suprema del país para educarles sobre la sextorsión y qué hacer si se encuentran con ella.

Fuentes: IAWJ (2012).

Monitoreo y evaluación

En este capítulo se incluye una serie de indicadores transversales sobre la incorporación de la perspectiva de género que se examinarán en los proyectos financiados por el Fondo. Además, hay indicadores, especificados por pilar, para guiar a los equipos de proyecto en la evaluación de sus carteras y la priorización de nuevos proyectos. El cuadro 2 se presenta aquí meramente a título ilustrativo, ya que las mediciones deben adaptarse a proyectos y contextos específicos. Para los resultados de un proyecto medidos en términos de cantidad de individuos, los indicadores deben desglosarse por sexo. Todos los indicadores deben incluir también valores de referencia.

Cuadro 2.

Indicadores transversales para el diseño de proyectos

Indicador (en porcentaje)

- Personas que aportan insumos/información que son mujeres/hombres.
- Usuarios de la información que son mujeres/hombres.
- Personas que registran denuncias que son mujeres/hombres.
- Campañas de concienciación relacionadas con la transparencia que incluyen medidas especiales para llegar a las mujeres.
- Recursos del conocimiento que incluyen análisis de género.

Indicadores por pilar para orientar la identificación y el desarrollo de proyectos

Integridad
financiera

En porcentaje:

- Lucha contra el lavado de dinero: Evaluaciones nacionales de riesgo que incluyan el análisis de los ingresos derivados de la trata de personas.
- Planes de acción nacionales de lucha contra el lavado de dinero que incluyan medidas relacionadas con la trata de personas.
- Evaluaciones de riesgo nacional de lavado de dinero que involucren un análisis de riesgos de exclusión financiera.
- Planes de acción nacionales contra el lavado de dinero que incorporen medidas que reduzcan los riesgos de sobre conformidad, y creen incentivos para los proveedores dispuestos a ofrecer productos y servicios de menor riesgo.

(continúa en la página siguiente)

Cuadro 2. (continuación)

Indicadores transversales para el diseño de proyectos

Indicadores por pilar para orientar la identificación y el desarrollo de proyectos	
Sistemas de control	<ul style="list-style-type: none"> Número de auditorías de resultados realizadas por las entidades fiscalizadoras superiores que tienen en cuenta las cuestiones de género, con datos desglosados por sexo y análisis de los obstáculos e impactos del programa en función del género. Número de auditorías de políticas o programas que aborden la Meta de Desarrollo Sostenible 51. Porcentaje de contrapartes de las entidades fiscalizadoras superiores que reciben capacitación para realizar auditorías sensibles al género. Porcentaje de sistemas de denuncias que incluyen el seguimiento desagregado por sexo de las denuncias y su resolución. Porcentaje de sistemas de denuncias que incorporan medidas destinadas a mejorar la información/accesibilidad para las mujeres.
Gobernanza de los recursos naturales	<p>En porcentaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudios de viabilidad previos al proyecto que incluyan un análisis sensible al género de los impactos esperados, y consideren temas como la prostitución, el abandono familiar y la violencia de género. Cartografía de inversiones relacionadas con la industria extractiva posterior al proyecto que abarque un análisis de impactos sensible al género.
Gobierno abierto	<p>En porcentaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Planes de acción de la AGA que incluyan compromisos específicos en materia de género. Mujeres/hombres en comités nacionales de gobierno abierto. Comités nacionales de gobierno abierto que incluyan organizaciones de mujeres. Procesos administrativos digitalizados/simplificados que se centren en las necesidades e intereses de las mujeres. Procesos presupuestarios que contengan análisis sensibles al género. Políticas nacionales de TIC que incluyan análisis y metas de igualdad de género. Políticas nacionales y subnacionales de adquisiciones que incorporen medidas destinadas a promover el aumento de la participación femenina. Oficiales de adquisiciones gubernamentales que reciben capacitación en materia de concienciación sobre cuestiones de género. Evaluaciones de la fuerza laboral de la administración pública que incluyan datos desagregados por sexo y análisis sensibles al género. Análisis de las jubilaciones de la función pública que contengan datos desglosados por sexo y análisis de los riesgos en función del género. Ejercicios de cartografía comunitaria que incluyan objetivos de género para la participación comunitaria, recolección de datos desagregados por sexo y análisis de riesgos e impactos con perspectiva de género.

(continúa en la página siguiente)

Cuadro 2. (continuación)

Indicadores transversales para el diseño de proyectos

Indicadores por pilar para orientar la identificación y el desarrollo de proyectos

Gobierno abierto (continuación)	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos con formularios de calificación por parte de los ciudadanos que tengan en cuenta las cuestiones de género para examinar aquellos programas que sean particularmente pertinentes para las necesidades de las mujeres; incorporar la participación femenina, e incluir el análisis de género de los impactos. • Sistemas de justicia que mejoren la cantidad y calidad de los datos disponibles públicamente con respecto a los casos de violencia de género. • Número de: • Evaluaciones de las medidas gubernamentales para hacer frente a la violencia de género. • Gobiernos (nacionales y subnacionales) que llevan a cabo una gestión automatizada de casos de violencia de género.
Sextorsión	<p>En porcentaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas de encuesta relacionadas con la transparencia que incorporen preguntas dirigidas a detectar la sextorsión. • Códigos de conducta que aborden explícitamente la sextorsión. • Examen y reforma de los mecanismos de denuncia (de ser necesario) para captar los casos de sextorsión. <p>Número de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Países miembros que lleven a cabo una reforma del marco jurídico para abordar la cuestión de la sextorsión. • Países que realicen campañas de toma de conciencia sobre la sextorsión.

Referencias

- Agora. Sin fecha. Parliamentary Action on Gender and Renewable Energy: Financing Gender Mainstreaming. Module 4. Agora-parl.orgl. Disponible en www.agora-parl.org/toolkit/gender/module4_1.
- Alhassan-Alolo, N. 2007. Gender and Corruption: Testing the New Consensus. *Public Administration and Development*, 27(3): 227–237. doi:10.1002/pad.455.
- Alianza para el Gobierno Abierto. 2016. Great Ideas for OGP Action Plans. Guatemala/Liberia. Publicación del 8 de marzo. Disponible en www.opengovpartnership.org/stories/great-ideas-ogp-action-plans-open-government-whom-committing-women.
- Alatas, V. et al. 2009. Gender, Culture, and Corruption: Insights from an Experimental Analysis. *Southern Economic Journal* 75(3): 663–680.
- Asiedu, E. 2016. Coming Home without Supplies: Impact of Household Needs on Bribe Involvement and Gender Gaps. GlobalFood Discussion Papers, No. 75. Disponible en www.econstor.eu/bitstream/10419/125781/1/845395130.pdf.
- Banco Mundial. 2012. The Effect of Women's Economic Power in Latin America and the Caribbean. Latin America and Caribbean Poverty and Labor Brief. Washington, D.C.: Banco Mundial. Disponible en <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11867/9780821397701.pdf?sequence=1>.
- . 2014. Infographic: Global Index Finder 2014—Gender and Income. (En línea.) Washington, D.C.: Banco Mundial. Disponible en <http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/>.
- Bastick, M. 2014. Integrating Gender into Oversight of the Security Sector by Ombuds Institutions & National Human Rights Institutions. Ginebra: Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Disponible en www.osce.org/odihr/118327?download=true.

- _____. 2015. Gender and Complaints Mechanisms: A Handbook for Armed Forces and Ombuds Institutions. Ginebra: Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas. Disponible en www.files.ethz.ch/isn/194726/DCAF-Handbook-Gender-Complaints-Mechanisms.pdf.
- Bauhr, M. 2012. Need or Greed Corruption. En: S. Holmberg y B. Rothstein (eds.), *Good Government. The Relevance of Political Science*. Londres: Edward Elgar Publishing.
- Bauhr, M. y L. Wängnerud. 2016. Inclusion or Exclusion? Gender Difference in Mobilization against Greed Corruption. Documento presentado en el Taller de Género y Corrupción de The Quality of Government Institute, 23-24 de mayo de 2016.
- Bianchi, M. 2015. Digital Age Inequality in Latin America. Open Democracy, 24 de junio. Disponible en www.opendemocracy.net/democraciaabierta/mat%C3%ADas-bianchi/digital-age-inequality-in-latin-america.
- BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2013. Implementation Guidelines for the Operational Policy on Gender Equality in Development. Gender and Diversity Section, Social Sector. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en <http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/38154638.pdf>.
- _____. 2016. Fondo de Transparencia (AAF: Annual Report 2016. Office of Outreach and Partnerships, Grants and Co-Financing Management Unit, Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- _____. 2017a. Gender Diversity. Sector Framework Document. Gender and Diversity Division. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1024040741-40.
- _____. 2017b. Herramientas para la integración de género en proyectos del Fomin. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8176/Toolkit-for-Mainstreaming-Gender-in-MIF-Projects.pdf?sequence=1>.
- _____. Sin fecha. Transparency Fund 2013-2018: Strategic Approach and Results Framework 2013-2018. IDB Partnerships. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39377028>.
- Bird, L. y N. Krauer, 2017. Case Study: Illicit Gold Mining in Peru. Ginebra: The Global Initiative against Transnational Organized Crime. Disponible en <http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/11/TGIATOC-Case-Study-Peru-1878-web-lo-res.pdf>.
- Björkman M. y J. Svensson. 2007. Power to the People: Evidence from a Randomized Field Experiment of a Community-Based Monitoring Project in Uganda.

- Documento de trabajo de investigación de políticas 4268. Washington, D.C.: Banco Mundial. Disponible en <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7447>.
- Boehm, F. y E. Sierra. 2015. The Gendered Impact of Corruption: Who Suffers More—Men or Women? U4 Brief, agosto de 2015:9. Bergen: Chris. Michelsen Institute y U4. Disponible en www.u4.no/publications/the-gendered-impact-of-corruption-who-suffers-more-men-or-women/pdf.
- Cap-Net, GWA (Gender and Water Alliance). 2014. Why Gender Matters in IWRM: A Tutorial for Water Managers. Full resource document. Disponible en www.thewaterchannel.tv/gender/content/img/frd-full-resource-document-web-version.pdf.
- Casas-Zamora, K. y M. Carter. 2017. Beyond the Scandals: The Changing Context of Corruption in Latin America. Rule of Law Report. Washington, D.C.: Inter-American Dialogue. Disponible en www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/02/Corruption-in-Latin-America_ROL_Report_FINAL_web-PDF.pdf.
- Dassen, N. y J. Cruz Vieyra (eds). 2012. Gobierno abierto y transparencia focalizada: tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3198/Open%20Government%20and%20Targeted%20Transparency:%20Trends%20and%20Challenges%20for%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean.pdf?sequence=1>.
- Dollar, D., R. Fisman y R. Gatti. 1999. Are Women Really the “Fairer” Sex? Corruption and Women in Government. PRR Gender and Development Working Paper No. 4. Washington, D.C.: Banco Mundial. Disponible en <http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/wp4.pdf>.
- Elena, S. 2015. Open Data for Open Justice: A Case Study of the Judiciaries of Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, Mexico, Peru and Uruguay. Center for the Implementation of Public Policies Promoting Equity and Growth, Open Data Research Symposium, celebrado el 27 de mayo en Ottawa, Canadá. Disponible en www.opendataresearch.org/dl/symposium2015/odrs2015-paper10.pdf.
- Ellis, A., C. Manuel y M. Blackden. 2006. Gender and Economic Growth in Uganda: Unleashing the Power of Women. Washington, D.C.: Banco Mundial. Disponible en http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPGENDER/Resources/gender_econ_growth_ug.pdf.
- Esarey, J. y G. Chirillo. 2013. “Fairer Sex” or Purity Myth? *Corruption, Gender, and Institutional Context. Politics & Gender*, 9: 361–389.
- Fung, A., M. Graham y D. Weil. 2007. Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency. Cambridge University Press.

- Fung, A., M. Graham, D. Weil y E. Fagotto. 2007. Transparency Policies: Two Possible Futures. *Taubman Center Policy Briefs*, PB-2007-1. Kennedy School of Government, Harvard University.
- GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). 2011. Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants. París: Grupo de Acción Financiera Internacional y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Disponible en www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20and%20Smuggling%20of%20Migrants.pdf.
- . 2013. Guidance on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion. París: Grupo de Acción Financiera Internacional y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Disponible en www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/AML_CFT_Measures_and_Financial_Inclusion_2013.pdf.
- GCB (Global Corruption Barometer). 2007. (En línea.) Berlín: Transparencia Internacional. Disponible en www.transparency.org/whatwedo/publication/gcb_2007.
- . 2013. (En línea.) Berlín: Transparencia Internacional. Disponible en www.transparency.org/gcb2013/report.
- Gelb, A. 2016. Balancing Financial Integrity with Financial Inclusion: The Risk-Based Approach to “Know Your Customer”. CGD Policy Paper 074. Washington D.C.: Center for Global Development. Disponible en www.cgdev.org/sites/default/files/CGD-Policy-Paper-Gelb-KYC-Financial-Inclusion.pdf.
- Goetz, A. M. 2007. Political Cleaners: Women as the New Anti-Corruption Force? *Development and Change*, 38(1): 87-105.
- Grimes, M. y L. Wängnerud. 2016. Gender and Corruption: A Theory of Conditioned Causality. Paper presented at the Gender and Corruption Workshop of The Quality of Government Institute, 23-24 de mayo. In Work Package: WP11 Building Accountability: Transparency, Civil Society and Administrative Responses.
- IAWJ (Asociación Internacional de Mujeres Jueces). 2012. Stopping the Abuse of Power through Sexual Exploitation: Naming, Shaming, and Ending Sextortion. Washington, D.C.: Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Disponible en www.iawj.org/wp-content/uploads/2017/04/Corruption-and-Sextortion-Resource-1.pdf.
- Jajkowicz, O. y A. Drobistzova. 2015. The Effect of Corruption on Government Expenditure Allocation in OECD Countries. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, Vol. 63, 138(4): 1251-1259. Disponible en https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063041251.pdf.

- Jubeto, Y. y A. O'Hagan. 2010. Los presupuestos públicos con perspectiva de género: propuesta a las instituciones comunitarias sobre el valor añadido de introducir los análisis basados en el género en la política presupuestaria de la Unión Europea y sus estados miembros. Madrid: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Disponible en www.igualdadnlaempresa.es/recursos/monograficos/docs/6_Gender_Budgeting_Yolanda_Jubeto_EME-1.pdf.
- Kenny, C. y M. O'Donnell. 2017. Expanding Women's Role in Developing Technology: Increasing Productivity, Improving Lives. CGD Notes. Washington, D.C.: Center for Global Development. Disponible en www.cgdev.org/sites/default/files/expanding-womens-role-developing-technology.pdf.
- La República. 2017. "Contraloría propone sistema integrado de denuncias para toda la administración pública". Política, 8 de diciembre. Grupo La República. Disponible en <http://larepublica.pe/politica/1155328-contraloria-propone-sistema-integrado-de-denuncias-para-toda-la-administracion-publica>.
- Leach, F. et al. 2003. An Investigative Study of the Abuse of Girls in African Schools. Education Papers 12849. Londres: Department for International Development. Disponible en <https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/12849/1/er030054.pdf>.
- Levinson, M. 2008. Whistleblowers: Women Experience More Retaliation than Men. Study Reports. CIO magazine, 8 de mayo. Disponible en www.cio.com/article/2436408/morale/whistleblowers--women-experience-more-retaliation-than-men--study-reports.html.
- Lewis, R, J. Villaseñor, D. M. West. 2015. Financial Inclusion in Latin America: Regulatory Trends and Market Opportunities. TechTank. Part of a series of the 2015 Brookings Financial and Digital Inclusion Project (FDIP) Report and Scorecard. Brookings Institution, 29 de octubre. Disponible en www.brookings.edu/blog/techtank/2015/10/29/financial-inclusion-in-latin-america-regulatory-trends-and-market-opportunities/.
- Lim, L. L. 1996. More and Better Jobs for Women. An Action Guide. An ILO Follow-up to the Fourth World Conference on Women and the World Summit for Social Development. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
- McHardy, P. y M. G. Donovan. 2016. The State of Social Housing in Six Caribbean Countries. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7514/The-State-of-Social-Housing-in-Six-Caribbean-Countries.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Neuman, L. 2016. The Right of Access to Information: Exploring Gender Inequities. *Institute of Development Studies*, 47(1). Disponible en <http://bulletin.ids.ac.uk/idsbo/article/view/38/html>.

- Nordic Consulting Group. 2009. A Gender Analysis of Corruption Forms, Effects on Eradication Strategies: Case Studies among the Poor in Urban and Post Conflict Settings. Investigación llevada a cabo para la Embajada de Dinamarca en Uganda.
- OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 2017. Government at a Glance 2017: Highlights. París: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Disponible en www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-2017-highlights-en.pdf.
- OLACEFS. Sin fecha. Auditoría coordinada sobre el tema de equidad de género realizada entre las entidades de fiscalización superior de Puerto Rico, Chile y Costa Rica. Disponible en <https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/equidad-genero/docs/informe-completo.pdf>.
- ONU Mujeres. 2012. Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls: Strategies to Eliminate Corruption. (En línea.) Disponible en www.endvawnow.org/en/articles/1013-strategies-to-eliminate-corruption-.html.
- OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa). 2014. Leveraging Anti-Money Laundering Regimes to Combat Trafficking in Human Beings. Viena: Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Disponible en www.osce.org/secretariat/121125?download=true.
- Palmieri, S. 2011. Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice. Reports and Document No. 65-2011. Ginebra: Unión Interparlamentaria. Disponible en <http://archive.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf>.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2005. Evaluation of UNDP's Cooperation Framework for the Arab States (2002-2005). Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en http://web.undp.org/evaluation/evaluations/documents/RCF_Evaluation_RBAS.pdf.
- . 2008. Tackling Corruption, Transforming Lives: Accelerating Human Development in Asia and the Pacific. Human Development Report Unit. Colombo: Centro Regional del PNUD. Disponible en www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Asia%20and%20Pacific%20HDR/RHDR_Full%20Report_Tackling_Corruption_Transforming_Lives.pdf.
- . 2012. Seeing Beyond the State: Grassroots Women's Perspectives on Corruption and Anti-Corruption. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Anti-corruption/Grassroots%20women%20and%20anti-corruption.pdf.

- . 2014a. Género y Corrupción en América Latina: ¿Hay alguna conexión? Documento de Trabajo. Panamá: Centro Regional del PNUD.
- . 2014b. Survey Methodology: Addressing Gender Equality Related Corruption Risks and Vulnerabilities in Civil Service. Bratislava: United Nations Development Programme Regional Centre for Europe and the Commonwealth of Independent States. Disponible en www.undp.md/media/tender_supportdoc/2015/1103/Survey_Methodology-_addressing_gender_equality_related.pdf.
- PNUD y UNIFEM (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer). 2010. Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connections. Primers in Gender and Democratic Governance #5. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Disponible en www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/womens-empowerment/corruption-accountability-and-gender-understanding-the-connection/Corruption-accountability-and-gender.pdf.
- Powell, A. 2017. Integrating a Gender Perspective into Transparency and Accountability Initiatives: Three Case Studies, *Gender & Development*, 25:3: 489-507, DOI: 10.1080/13552074.2017.1379774. Disponible en www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2018/02/Gender-and-Development-Journal-Integrating-a-gender-perspective-into-transparency-and-accountability-initiatives-three-case-studies.pdf.
- Pring, C. 2017. People and Corruption Latin America and the Caribbean. Berlín: Transparencia Internacional. Disponible en www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_barometer_people_and_corruption_latina_america_and_the_car.
- Rheinbay, J. y M. Chêne. 2016. Gender and Corruption Topic Guide. Berlín: Transparencia Internacional. Disponible en www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Topic_guide_gender_corruption_Final_2016.pdf.
- Rivas, M. F. 2008. An Experiment on Corruption and Gender. Working Paper (The Papers from Department of Economic Theory and Economic History of the University of Granada, No. 08/10). Disponible en www.ugr.es/~teoriahe/RePEc/gra/wpaper/thepapers08_10.pdf.
- Scott, J., R. Dakin, K. Hellery y A. Eftimie. 2013. Extracting Lessons on Gender in the Oil and Gas Sector: A Survey and Analysis of the Gendered Impacts of Onshore Oil and Gas Production in Three Developing Countries. Extractive Industries for Development Series No. 28. Washington, D.C.: Banco Mundial. Disponible en <http://documents>.

- worldbank.org/curated/en/266311468161347063/pdf/798940NW
P0280E0Box0379795B00PUBLIC0.pdf.
- Sellar. 2017. John, Human Rights in a Hostile Environment. Blog. Initiative Against Transnational Organized Crime. Disponible en <http://globalinitiative.net/programs/human/>.
- Singh, M. 2018. Apps Let Women Say #MeToo About Street Harassment. Washington, D.C.: National Public Radio, 11 de enero. Disponible en www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/01/11/577154367/apps-let-women-say-metoo-about-street-harassment.
- Steiner, J. 2017. Petty Corruption Isn't Petty. The Global Anti-Corruption Blog, 29 de diciembre. Disponible en <https://globalanticorruptionblog.com/2017/12/29/petty-corruption-isnt-petty/#more-11003>.
- Stensöta, H., L. Wängnerud y R. Svensson. 2015. Gender and Corruption: The Mediating Power of Institutional Logics. *Governance*, 28(4): 475-496.
- Swamy, A., S. Knack, Y. Lee y O. Azfar. 2001. Gender and Corruption. *Journal of Development Economics*. 64(1): 25-55.
- Sundström, A. y L. Wängnerud. 2016. Corruption as an Obstacle to Women's Political Representation: Evidence from Local Councils in 18 European Countries. *Party Politics*, 22(3): 354-369. Disponible en <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354068814549339>.
- Sung, H. E. 2012. Women in Government, Public Corruption, and Liberal Democracy. A Panel Analysis. *Crime, Law and Social Change*, 58(3): 195-219.
- TGI (The Global Initiative). 2017. Case Study: Illicit Gold Mining in Peru. Ginebra: The Global Initiative against Transnational Organized Crime. Disponible en <http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/11/TGIATOC-Case-Study-Peru-1878-web-lo-res.pdf>.
- The Economist. 2017. "Tax is a Feminist Issue: Why National Budgets Need to Take Gender into Account." 23 de febrero. Disponible en www.economist.com/news/finance-and-economics/21717404-designing-fiscal-policies-support-gender-equality-good-growth-why.
- Thomas, J. y E. Ioannides. Sin fecha. Balancing Act. Opinion: Financial Inclusion. Disponible en www.afi-global.org/sites/default/files/publications/incompliance_financial_inclusion_article.pdf.
- Thompson Reuters Foundation. 2015. Combating Sextortion: A Comparative Study of Laws to Prosecute Corruption Involving Sexual Exploitation. Thompson Reuters en asociación con la Asociación Internacional de Mujeres Jueces y Marval O'Farrell & Mairal. Disponible en www.trust.org/contentAsset/raw-data/588013e6-2f99-4d54-8dd8-9a65ae2e0802/file.

- TI (Transparencia Internacional). 2007. Gender and Corruption: Understanding and Undoing the Linkages, Documento de trabajo 03/2007. Berlín: Transparencia Internacional. Disponible en <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan044385.pdf>.
- . 2010. Corruption and Gender in Service Delivery: The Unequal Impacts. Documento de trabajo 02/2010. Berlín: Transparencia Internacional. Disponible en https://www.transparency.org/whatwedo/publication/working-paper_02_2010_corruption_and_gender_in_service_delivery_the_unequal.
- . 2013. Whistleblowing in Europe: Legal Protections for Whistleblowers in the EU. Berlín: Transparencia Internacional. Disponible en www.transparency.org/whatwedo/publication/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowers_in_the_eu.
- . 2014. Gender, Equality and Corruption: What Are the Linkages? Policy Brief #01/2014. Berlín: Transparencia Internacional.
- . 2015. Women's Experience of Corruption: Lessons from Two Unions in Bangladesh. Bangladesh: Transparency International.
- . 2016. Sextortion: Undermining Gender Equality. (En línea.) Disponible en www.transparency.org/news/feature/sextortion_undermining_gender_equality.
- Transparency Rwanda. Sin fecha. Gender Based Corruption in Workplaces in Rwanda. Kigali: Transparency Rwanda. Disponible en https://www.transparency.org/news/pressrelease/20110811_rwandan_workplaces.
- Trapnell, Stephanie. 2017. Transparency Fund: Review of Results (2007-17). Documento de debate No. IDB-DP-554. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8710/Review-of-Transparency-Fund-Results-2007-2017.PDF?sequence=1&isAllowed=y>.
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2004. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Nueva York: Naciones Unidas. Disponible en <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>.
- . 2016. Global Report on Trafficking in Persons 2016. Sales No. E.16.IV.6. Nueva York: Naciones Unidas. Disponible en www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf.
- Vanderbilt University. 2010. AmericasBarometers. Latin American Public Opinion Project (En línea.) Nashville, Tenn.: Vanderbilt University. Disponible en www.vanderbilt.edu/lapop/ab2010.php.

- _____. 2012: Latin American Public Opinion Project. (En línea.) Nashville, Tenn.: Vanderbilt University. Disponible en www.vanderbilt.edu/lapop/ab2012.php.
- Web Wide Web Foundation. 2008-2018. Women's Rights Online. Disponible en <https://webfoundation.org/our-work/projects/womens-rights-online/>.
- WJP (World Justice Project). 2015. WJP Open Government Index 2015. Disponible en <https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-open-government-index-2015>.
- World Wide Web Foundation. 2008-2018. Women's Rights Online Digital Gender Gap Audit. Disponible en <https://webfoundation.org/research/digital-gender-gap-audit/>.
- Zicherman, N. 2006. "It is difficult to escape what is linked to survival": Sexual Exploitation and Food Distribution in Burundi. Humanitarian Practice Network, noviembre. Disponible en <https://odihpn.org/magazine/%C2%91it-is-difficult-to-escape-what-is-linked-to-survival%C2%92-sexual-exploitation-and-food-distribution-in-burundi/>.

